

San Miguel, veintinueve de abril de dos mil veintidós

Vistos:

En estos autos RIT O-949-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, su jueza titular doña Alondra Castro Jimenez, acogió la demanda que dedujo doña Daniela Núñez Silva en contra de Salba Servicios Educativos EIRL y la Corporación Educativa Nuestra Infancia, declarándose justificado su auto despido y siendo ambas demandadas condenadas al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indican, con reajustes, intereses y costas.

En contra de esta resolución, la parte demandada de la Corporación Educativa Nuestra Infancia dedujo recurso de nulidad, fundado en la impetración de la causal contenida en el artículo 477 del código laboral, en su hipótesis de infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales.

Esta Corte declaró admisible el recurso, y se procedió a la vista de la causa el día 22 de abril pasado; se escuchó al abogado de la parte recurrente que compareció a estrados, quedando la causa en estado de acuerdo.

Considerando:

Primero: Que como sustento de su pretensión de nulidad, la parte recurrente sostiene que se ha vulnerado la garantía contenida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que consagra el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el principio de la legalidad y, en especial, el derecho a un debido proceso.

Expresa que el vicio que se invoca, fue reclamado oportunamente en forma previa al presente arbitrio, mediante incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento, afirmando que sólo tomó conocimiento de la presente causa, con posterioridad a la dictación de la sentencia, esto es, el día 22 de octubre último, sin que a dicha data se le haya notificado la demanda ni resolución judicial alguna.

Señala que ello se produjo, porque conforme consta, la notificación efectuada –que se realizó por avisos– se dirigió a la Corporación referida, identificando como su representante legal, a don Jorge Salazar Barahona, en



circunstancia que carece de dicha calidad, y por lo tanto no ostenta poder alguno para actuar en dicha causa; en efecto, indica que conforme consta de la documentación que describe, la personería para actuar en representación de la entidad mencionada, recae en doña Gloria Salazar Barahona, no obstante lo cual, el tribunal tuvo por válidamente notificada a la recurrente de la demanda que inició la presente causa, incurriendo en la infracción de garantías constitucionales que se indica, añadiendo que incluso, se le aplicaron los apercibimientos de los artículos 453 N° 5 y 3 del código laboral, como asimismo, el apercibimiento del inciso séptimo del numeral 1° del mismo texto legal.

En tales condiciones, considera que el fallo recurrido fue dictado con infracción al debido proceso, vulnerando su derecho a defensa, al no ser debidamente emplazado en el juicio, obstaculizando su derecho de asistir a las audiencias correspondientes y deducir sus defensas.

Finaliza explicando la manera en que las infracciones denunciadas de manera subsidiaria influyen sustantivamente en lo resolutivo del fallo, solicitando, en concreto, que se acoja el presente arbitrio, invalidando la sentencia de mérito, y retrotrayendo la causa al estado de fijar una nueva audiencia preparatoria.

Segundo: Que, conforme se advierte del expediente electrónico, la presente causa se inició mediante demanda presentada el 11 de diciembre de 2020, por la cual la actora, técnica de párvulos, demanda el despido indirecto y la condena al pago de las prestaciones que señala. Tal acción se dirige en contra de Salba Servicios Educativos EIRL, representada por Jorge Salazar Barahona y en contra de la Corporación Educacional Nuestra Infancia, con el mismo representante legal.

Consta de la historia de la causa, que se realizaron varios intentos por notificar a los demandados, los que no prosperaron, ya sea por no encontrarse la dirección donde debían ser ubicados, o no lograr conformar que corresponda a su domicilio, razón por la cual, con fecha 3 de mayo de 2021, se ordenó su notificación por avisos, conforme lo autoriza el artículo 439 del estatuto laboral, constando las publicaciones del extracto respectivo, en el Diario Oficial del día 17 de mayo de 2021.



Con el mérito de lo actuado, se dio curso progresivo a los autos, en rebeldía de los demandados, dictándose la decisión impugnada. El 25 de octubre, la parte recurrente dedujo incidente de nulidad por falta de emplazamiento, fundada en similares términos que el presente arbitrio, el que luego de ser debidamente tramitado, fue desestimado con fecha 7 de enero último.

Tercero: Que, como es sabido, el artículo 19, numeral 3° de nuestra Carta Fundamental, otorga a todas las personas la garantía del debido proceso, concepto al que le es reconocido su carácter de garantía constitucional y derecho fundamental, en cuanto todas las decisiones jurisdiccionales deben satisfacer un estándar mínimo, que en lo esencial, dice relación con que el pronunciamiento de fondo debe sustentarse en un proceso previo y legalmente tramitado por un órgano dotado por la ley de la función jurisdiccional, sujeto a las reglas formales que configuran un procedimiento racional y justo.

En suma, tal noción es formada por un conjunto de garantías que la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y en vigencia, y las leyes le entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se pretende que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que se respeten los procedimientos fijados por la ley y que las sentencias sean debidamente fundadas.

Cuarto: Que, en una primera aproximación, conforme lo antes expuesto, se debe señalar que los argumentos que sirven de fundamento a la presente alegación, ya fueron planteados por vía incidental de nulidad procesal por falta de emplazamiento, y desestimados mediante interlocutoria de siete de enero último, resolución por la cual se estableció que la actora suscribió un contrato de trabajo con fecha 1 de noviembre de 2015, con Salba Servicios Educativos E.I.R.L., representada por don Jorge Salazar Barahona, sociedad a la cual se dirigió la carta de autodespido que sustenta el proceso; sin embargo, consta de los certificados emanados de las entidades de seguridad social, que desde marzo de 2020 y hasta septiembre del mismo año, quien siempre declaró -y en algunos casos también pagó- las cotizaciones de la demandante fue la Corporación



Educacional Nuestra Infancia, que corresponde a la recurrente. En razón de dicha circunstancia, el tribunal rechazó la incidencia de nulidad planteada.

Como se observa, el fundamento del presente recurso se trata, entonces, de una cuestión sobre la cual ya existe un pronunciamiento, de modo que es palmario que el recurrente, intenta por esta vía recursiva de estricto derecho, revivir una discusión que ya fue resuelta en la audiencia pertinente, lo que corresponde a una impropiedad procesal, que no es posible de admitir, y que conduce irremediablemente a desestimar el recurso.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo concluido, y a mayor abundamiento, analizando la causal en su mérito, se debe señalar que el defecto que se invoca en el libelo impugnatorio, se asila en el error en que incurre la demandante al designar como representante de la recurrente, a una persona que formalmente no lo es, cuestión que en su entender, conculca la garantía del debido proceso.

Sin embargo, una infracción de dicho concepto, debe constatarse a la luz de las normas procesales aplicables en la especie, pues, como fluye de la norma constitucional contenida en el inciso sexto del numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, le corresponde al legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo, de manera que, conforme el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, si aparece que en la especie, el procedimiento se ajustó a la normativa legal procedimental, se hace menester una justificación mayor que dé cuenta de la infracción que se invoca como basamento del recurso.

Al respecto, es necesario, entonces, recordar que el derecho laboral, atendida su naturaleza tutelar, se encuentra presidida por ciertos principios rectores que deben inspirar la aplicación de sus normas, tanto en un aspecto sustantivo como adjetivo, destacando, dentro de ellos, el de la primacía de la realidad, el cual dispone, que frente a una disputa o controversia entre aquello que consta de documentos formales, o que puede exigirse de ellos, en relación a lo que en la práctica sucede, o que responde a la percepción del trabajador, debe preferirse lo último.



Como consagración de dicho principio, y en materia de representación, encontramos el dispositivo 4º del Código del Trabajo, que a diferencia de las exigencias formales propias del derecho civil puro, se aleja de tales criterios estrictos, y establece que *“Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica”*.

Luego, en el inciso segundo, señala que *“Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores”*.

De ello se sigue, que a la noción de procedimiento racional y justo, en el contexto de la aplicación del estatuto laboral, se incorpora la idea de que la representación de las entidades jurídicas, no se sujeta a los actos formales de otorgamiento de personería, sino a los contextos concretos y materiales que se dan en la práctica de la vinculación laboral, a fin de tutelar con celeridad y eficacia, los derechos de los trabajadores, evitando que la tramitación de un proceso, se vea dilatada por exigencias en este ámbito de cuestiones.

Sexto: Que en la especie, es palmario que la parte recurrente, corresponde a la empleadora de la actora –cuestión que en todo caso, no se controvierte–, al tratarse de la entidad que actúa como sostenedora del Jardín Infantil en que se desempeñó la actora como técnico de párvulos, debiendo dejarse constancia, al respecto, que el propio abogado de la Corporación Educacional Nuestra Infancia, expresó en estrados, que dicha entidad fue constituida con el solo propósito de cumplir la exigencia legal de la Ley N° 20.845 que dispuso la transferencia de la calidad de sostenedor desde personas jurídicas con fines de lucro, a una Corporación Educacional sin fines de lucro, razón que justifica el traspaso de la entidad que originalmente suscribe el contrato con la actora (Salba Servicios Educativos EIRL), a la demandada que en estos autos, deduce el recurso.



En tales condiciones, es posible entender, que conforme a la presunción de derecho antes referida, habiendo suscrito la actora un contrato con la anterior sostenedora, representada por el señor Jorge Salazar, este se encuentra en el supuesto del artículo 4° del Código del Trabajo, en relación con la entidad sucesora en la calidad de sostenedor del establecimiento educacional, no debiendo olvidarse, que el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.845, en su inciso sexto, señala que *“En ningún caso la transferencia de la calidad de sostenedor alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que los rijan, los que continuarán vigentes con el nuevo empleador, para todos los efectos legales, como si dicha transferencia no se hubiese producido”*.

Así las cosas, no aparece que lo reclamado configure una transgresión de la garantía constitucional que se reclama, por cuanto del mérito de los antecedentes, fluye que la notificación de la demanda, fue efectuada mediante avisos en el Diario Oficial, conforme la legislativa vigente, con indicación expresa de las personas jurídicas demandadas, y habiéndose señalado en la demanda, que el contrato fue celebrado sólo con Salba Servicios Educacionales EIRL, sostenedora del Jardín Infantil en que se desempeñaba, pero señalando que al revisar el pago de sus cotizaciones, se percató que desde marzo de 2020, el referido establecimiento *“...pasó a la corporación, cambiando de empleador en el registro de cotizaciones, pasando a figurar como RUT pagador el de Corporación Educacional Nuestra Infancia pero jamás fui informada de esto y no existe ningún documento que lo formalice”*, cuestión que, en todo caso, fue debidamente establecida al resolverse el incidente de nulidad que se dedujo en forma coetánea al presente recurso.

Séptimo: Que, consecuentemente por las razones expuestas, el recurso formulado deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada de Corporación Educacional Nuestra Infancia en contra



de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en los autos RIT O-949-2020.

Redactado por el ministro señor Martínez.

Regístrese y comuníquese.

Laboral-Cobranza N° 45-2022.-

Pronunciado por la Primera Sala integrada por los ministros señor Patricio Martínez Benavides, señor Marcelo Ovalle Bazán (I) y el abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Misseroni, no obstante que concurrió a la vista y posterior acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por Ministro Patricio Esteban Martínez B. y Ministro Suplente Marcelo Ignacio Ovalle B. San Miguel, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

En San Miguel, a veintinueve de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>